

Guadalajara Jalisco, a 24 veinticuatro de noviembre del año 2022 dos mil veintidós.

Vistos para resolver los autos del toca **465/2022**, formada con motivo del recurso de apelación que hizo valer **[No.1]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1]** en su carácter de la parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha **27 veintisiete de junio del año 2022 dos mil veintidós**, pronunciada por el Juez Cuarto de lo Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, en el juicio **CIVIL ORDINARIO**, promovido por **[No.2]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1]** en contra de **[No.3]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1]** registrado bajo expediente **259/2021**.

R E S U L T A N D O:

1. Advertido por las Magistradas de esta Sala que, a este asunto se vinculan derechos de dos niñas, ante la necesidad de citar sus nombres, al hacer referencia a las mismas únicamente se insertarán sus iniciales.

Consideramos lo anterior, conforme a lo dispuesto en el ordinal 40, punto 2, fracción VIII, de la Convención sobre los Derechos del Niño; el arábigo 6º, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos;¹ los artículos

¹ Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

(...)

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se registrarán por los siguientes principios y bases:

I. (...)

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (...)

13, fracción XVII, 76, 77 y 79 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;² los demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano,³ así como la interpretación que de los mismos realicen los órganos internacionales expertos, como el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,⁴ empleado como instrumento orientador, a virtud de que en él se encuentra lo relativo a la privacidad del menor de edad y para ello, los juzgadores, en la medida de lo posible, debemos resguardar la privacidad de toda participación infantil, regla que tiene 2 dos implicaciones prácticas: el resguardo de la identidad de la niña y la privacidad de las diligencias en las que ésta se encuentre.

² Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:

XVII. Derecho a la intimidad;

Artículo 76. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la protección de sus datos personales.

Niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo aquélla que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación.

Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, deberán orientar, supervisar y, en su caso, restringir, las conductas y hábitos de niñas, niños y adolescentes, siempre que atiendan al interés superior de la niñez.

Artículo 77. Se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación que cuenten con concesión para prestar el servicio de radiodifusión y telecomunicaciones, así como medios impresos, o en medios electrónicos de los que tenga control el concesionario o medio impreso del que se trate, que menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al principio de interés superior de la niñez.

Artículo 79. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la protección de la identidad e intimidad de niñas, niños y adolescentes que sean víctimas, ofendidos, testigos o que estén relacionados de cualquier manera en la comisión de un delito, a fin de evitar su identificación pública. La misma protección se otorgará a adolescentes a quienes se les atribuya la realización o participación en un delito, conforme a la legislación aplicable en la materia.

³ La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

⁴ **Capítulo III, Reglas y consideraciones generales para las y los juzgadores.**

En consecuencia, a lo largo de esta sentencia se omitirá el nombre y los datos personales de dos niñas involucradas en la contienda, y en lugar de su patronímico, únicamente se emplearán las siglas, a fin de resguardar su identidad y en general todos aquellos datos que sirvan para identificarlas.

2. El juez natural al pronunciar la resolución impugnada, lo hizo con las siguientes **PROPOSICIONES**:

“PRIMERA: Los presupuestos procesales de **competencia, personalidad, capacidad y vía** quedaron plenamente justificados en autos.

SEGUNDA: Se **declara disuelto el vínculo matrimonial** que une al señor **[No.4] ELIMINADO el nombre completo [1]** y a la señora **[No.5] ELIMINADO el nombre completo [1]** bajo acta número **[No.6] ELIMINADO el número 16 [16]**, de fecha 30 treinta de julio del 2015 dos mil quince, celebrado ante el C. Oficial del Registro Civil Número 1 uno de Puerto Vallarta, Jalisco; así mismo, se decreta **disuelta la SOCIEDAD LEGAL** formada por las partes en conflicto, a raíz de su matrimonio, debiéndose llevar a cabo su liquidación en el periodo de ejecución de sentencia mediante el incidente respectivo, debiendo exhibir en el momento procesal oportuno los documentos con los que acrediten la propiedad de los bienes que integran la sociedad a liquidar.

TERCERA: Por lo que ve a la **PATRIA POTESTAD** de las menores **[No.7] ELIMINADO el nombre completo [1]**. y **[No.8] ELIMINADO el nombre completo [1]**, dado que en actuaciones no se acredita que alguno de los padres resulte nocivo para la integridad física, emocional o psicológico del menor, ambos padres deberán seguir ejerciendo la patria potestad sobre el mismo.

CUARTA: Se concede a la parte actora **[No.9] ELIMINADO el nombre completo [1]** la **CUSTODIA DEFINITIVA** de sus menores hijas **[No.10] ELIMINADO el nombre completo [1]**. y **[No.11] ELIMINADO el nombre completo [1]**, a efecto de que se mantenga la situación de hecho y de derecho existentes en la actualidad.

QUINTA: Respecto al **RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIA DEFINITIVA**, se declara vigente el derecho del demandado **[No.12] ELIMINADO el nombre completo [1]** para que lleve a cabo la convivencia con sus menores hijas **[No.13] ELIMINADO el nombre completo [1]**. y **[No.14] ELIMINADO el nombre completo [1]**, a fin de que en lo posible, no se pierda el vínculo afectivo entre el menor en cita, con su progenitor, en atención a que no se desprende de actuaciones, ni siquiera indico alguno, en el sentido de que la

convivencia del menor con su progenitor resulte nociva o que las partes desplieguen una conducta perjudicial para sus descendientes.

SEXTA: Sin que resulte necesario que el suscrito Juzgador haga pronunciamiento respecto a la cuestión de **ALIMENTOS** en favor de las menores [No.15] **ELIMINADO el nombre completo [1]**. y [No.16] **ELIMINADO el nombre completo [1]**, ello en virtud de que con fecha 4 cuatro de febrero del 2022 dos mil veintidós, las partes [No.17] **ELIMINADO el nombre completo [1]** y [No.18] **ELIMINADO el nombre completo [1]** presentaron en el local de este Juzgado, un convenio debidamente ratificado (visible a fojas 89 de autos), por lo que ve a la cuestiones de **ALIMENTOS** de las menores [No.19] **ELIMINADO el nombre completo [1]**. y [No.20] **ELIMINADO el nombre completo [1]**, mismo que se elevó a categoría de sentencia ejecutoriada mediante auto de fecha 1 primero de abril del 2022 dos mil veintidós (visible a foja 103 de autos), condenándose a las partes a estar y pasar por él, en todo tiempo y lugar.

SÉPTIMA: En virtud del divorcio decretado, ambos cónyuges quedan en aptitud de contraer nuevas nupcias.

OCTAVA.- Sin que exista condena en gastos y costas en virtud de que no existe cónyuge culpable, máxime que no existe petición de parte en ese sentido, y el presente juicio es un asunto de índole familiar.

NOVENA: De conformidad a lo previsto en el artículo 457 del Enjuiciamiento Civil del estado una vez transcurrido el término para inconformarse del presente fallo, y habiendo causado estado la presente resolución, se ordena la publicación de un extracto de las proporciones contenidas en esta sentencia, por una sola vez, en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.

DÉCIMA: En términos del artículo 422 del Código del Estado de Jalisco, en relación con el numeral 775 del Código Procesal Civil de este Estado, ejecutoriada la sentencia de divorcio y **exhibida en autos la publicación del extracto de la presente sentencia**, se ordena **girar exhorto** con los insertos necesarios y copias certificadas de las constancias necesarias, previo al pago del impuesto correspondiente al **C. Juez de Primera Instancia de lo Familiar en Turno del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco** por conducto de la **Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco**, a efecto de que el Juez exhortado, de encontrarlo ajustado a derecho y por comisión de este Juzgado, libre atento con copias certificadas de las actuaciones conducentes al **C. Director del Archivo General del Registro Civil del Estado de Jalisco** para que levanten el acta correspondiente, publique la parte resolutive durante quince días en los Estrados destinados al efecto.

Luego, se ordena **girar oficio** con los insertos necesarios y copias certificadas de las constancias, previo pago del impuesto correspondiente al **C. Oficial del Registro Civil número 01 uno**

de Puerto Vallarta, Jalisco, ante quien se celebró el matrimonio, para que levante el acta de divorcio correspondiente, publique la parte resolutive durante quince días en los Estrados destinados al efecto, y la archiven con el mismo número de acta en el apéndice correspondiente; asimismo, para que realice las anotaciones del divorcio que aquí se decreta en el acta de nacimiento de la señora [No.21] ELIMINADO el nombre completo [1] cuyos datos obran en el punto VI de la parte considerativa de este fallo.-

*Por último, se ordena **girar exhorto** con los insertos necesarios y copias certificadas de las constancias necesarias, previo pago del impuesto correspondiente al **C. Juez Competente en Turno de Tlalpan, Ciudad de México (antes Distrito Federal)** por conducto del **Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México**, a efecto de que el juez exhortado, **gire oficio al C. Oficial del Registro Civil número 30 treinta de Tlalpan, Ciudad de México (antes Distrito Federal)**, con la finalidad de que realice las anotaciones del divorcio que aquí se decreta en el acta de nacimiento del señor [No.22] ELIMINADO el nombre completo [1] cuyos datos obran en el punto VI de la parte considerativa de este fallo*

DÉCIMA PRIMERA: NOTIFICACIÓN: *Toda vez que la presente se pronuncia dentro del término de Ley establecido en el artículo 290 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, la notificación que de la misma se haga a las partes surtirá efectos conforme a la que se realice mediante lista.”*

3. Inconforme con dicha resolución [No.23] ELIMINADO el nombre completo [1] en su carácter de la parte actora, se alzó en apelación, misma que fue admitida en **AMBOS EFECTOS**, turnadas que fueron las actuaciones a esta Sala, por auto de fecha 03 tres de noviembre de 2022 dos mil veintidós, se admitió la apelación y se confirmó la calificación del grado, se tuvo a la apelante expresando agravios, así como señalando domicilio y autorizados para recibir notificaciones en esta Segunda Instancia; se ordenó recabar certificación de la Secretaría de Acuerdos del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en la que se advirtiera si la parte apelante [No.24] ELIMINADO el nombre completo [1] se ordenó notificarle por medio de Boletín Judicial, tomando en consideración que dentro del presente proceso se encuentran inmersos intereses sociales y derechos de dos niñas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 ter y 68 quárter del

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, y 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Social, se ordenó dar a los Agentes de la Procuraduría Social del Estado y Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la intervención que en derecho corresponde; una vez recibidas las vistas, se citaría para sentencia.

Por auto de fecha 14 catorce de noviembre del año 2022 dos mil veintidós, se tuvo por recibidos los escritos presentados por **ANA CAROLINA ÁVILA ROMO** en su calidad de Agente de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco y **LOURDES ILIANA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ**, en su carácter de Agente de la Procuraduría Social, mediante el cual se les tuvo evacuando la vista ordenada con antelación; en consecuencia, se reservaron los autos a la vista de los integrantes de ésta Sala, para dictar sentencia, misma que se pronuncia de acuerdo a los siguientes:

CONSIDERANDOS:

I. COMPETENCIA. - Acorde a lo establecido en el artículo 48, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, esta Sala resulta competente para conocer y resolver la apelación interpuesta.

II. AGRAVIOS EXPUESTOS POR
[No.25]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] EN SU
CARÁCTER DE PARTE ACTORA: Por economía procesal se dan por transcritos los agravios expresados por el recurrente, a los que en obvio de repeticiones innecesarias se remite este Órgano Colegiado en apoyo a la tesis de Jurisprudencia que aparece en la Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados

de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: IX- Abril, página: 409, bajo el rubro y texto siguiente:

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. EL TRIBUNAL AD QUEM NO ESTA OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. *No existe precepto legal alguno que obligue a la autoridad de segunda instancia a transcribir en su sentencia los agravios que se hicieran valer, pues el artículo 508 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, sólo le impone el deber de analizarlos.”*

III. CALIFICACION DE LOS AGRAVIOS: Teniendo a la vista los autos y documentos de primer grado, así como, las actuaciones que integran esta segunda instancia, mismas que merecen valor probatorio pleno de conformidad a lo previsto por el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se anticipa que los agravios esgrimidos en autos, resultan **INFUNDADOS e INSUFICIENTES** para **REVOCAR o MODIFICAR** la sentencia impugnada, por las consideraciones y fundamentos de derecho siguientes:

IV.- ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS: Cabe hacer mención que esta Sala atenderá los agravios hechos valer en forma global, puesto que su estrecho enlace así lo permite tal y como la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación ha facultado a los órganos jurisdiccionales de segundo grado, como se desprende de la Jurisprudencia localizable en la Séptima Época. Registro: 241958. Instancia: Tercera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 48 Cuarta Parte. Materia(s): Civil. Tesis: Página: 15. Genealogía: Apéndice 1917-1985, Cuarta Parte, Tercera Sala, tesis 26, página 70, que dice:

“AGRAVIOS, EXAMEN DE LOS. *Es obvio que ninguna lesión a los derechos de los quejosos puede causarse por la sola circunstancia de que los agravios se hayan estudiado en su conjunto, esto es, englobándolos todos ellos, para su análisis, en diversos grupos. Ha de admitirse que lo que interesa no es*

precisamente la forma como los agravios sean examinados, en su conjunto, separando todos los expuestos en distintos grupos o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, etcétera; lo que importa es el dato sustancial de que se estudien todos, de que ninguno quede libre de examen, cualesquiera que sea la forma que al efecto se elija.”

En síntesis, la parte apelante expresó como agravios, los siguientes:

Primer agravio.- Le causa agravio la proposición tercera de la sentencia definitiva, ya que el A quo no es congruente ni precisa con las prestaciones reclamadas ni las pruebas ofertadas de su parte, en razón de que pasó por alto la valoración de las pruebas aportadas, en concreto el medio de convicción número VII, en relación con los hechos 4 y 6, que deja de evidencia que denunció al demandado por violencia familiar, que no valoró correctamente las pruebas, puesto que no fueron objetadas ni hubo prueba en contrario, por ende se perfeccionan, por lo que se deberá de declarar la pérdida de la patria potestad, tal y como lo peticiono para beneficio de sus hijas menores de edad, esto con el fin de proteger su integridad moral y corporal, su educación, atendiendo al interés superior de las niñas.

Segundo agravio. – Le causa lesión a la actora y a los derechos de las niñas [No.26] ELIMINADO el nombre completo [1] y [No.27] ELIMINADO el nombre completo [1], el criterio incorrecto del Juez primario por la proposición tercera de la sentencia definitiva, ya paso por alto el análisis de los hechos que mencionó en su escrito inicial de demanda, donde especifica que el hoy demandado es una persona que denota violencia, agresiva y compulsiva, por lo que le causa un temor fundado el hecho de que por los impulsos del demandado y por

la amenazas ya realizadas, decida llevarse a sus hijas menores de edad a otra parte de [No.28]_ELIMINADAS_las_referencias_personales_[55] al ser originario de la [No.29]_ELIMINADAS_las_referencias_personales_[55] por lo que se debe hacer un estudio minucioso y a fondo del interés superior del niño, en virtud de existir antecedentes de conductas nocivas por parte demandado hacia ella y sus menores hijas.

Tercer agravio.- Le causa perjuicio a ella y a sus hijas menores de edad, el criterio incorrecto por el Juez de origen, en la proposición tercera de la definitiva, en virtud de que el demandado no siempre cumple con su obligación de alimentos, misma que ratificó ante la presencia judicial y los días que les toca convivir y pasar a ver sus hijas menores de edad no lo hacen porque se va a tomar y decide dejar esperando a sus hijas, causándoles violencia psicológica y emocional.

Cuarto agravio. -Solicita la suplencia en la deficiencia de los conceptos de agravio expresado, que contempla el artículo 427 en su párrafo final del código de enjuiciamiento civil del estado.

Primeramente, en el caso a estudio, estamos en presencia de una controversia suscitada entre ambos progenitores por la pérdida de la patria potestad de sus hijas menores de edad.

Por ende, se debe dar respuesta a la interrogante siguiente: ¿Cómo debe proceder el juzgador ante una situación en donde se controvierte la pérdida de la patria potestad de dos niñas por ambos progenitores? Para dar respuesta a esta interrogante, es importante señalar que en cualquier

controversia en la que se vean involucradas derechos de menores de edad, el juzgador siempre la persona juzgadora tendrá la obligación de atender el interés superior de las mismas.

Bajo esa lógica, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado en múltiples precedentes, sobre el interés superior del menor, en el caso conviene recordar que el interés superior de la infancia encuentra su fundamento en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En efecto, dicho precepto en lo que interesa, establece lo siguiente:

“Artículo 4o.- [...]

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

[...]”

Este interés, también se encuentra reconocido en el artículo 3, apartado 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, pues en él se indica lo siguiente:

“Artículo 3.

1.- En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.”

De lo dispuesto en esos preceptos, se advierte que en cualquier decisión, actuación o medida que involucre a la niñez, el Estado a través de sus diversas autoridades, tiene la ineludible obligación de atender el interés superior de la niñez; sin embargo, dichas disposiciones, no precisan qué es lo que debe entenderse por ese interés.

No obstante, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el interés superior de la infancia constituye una pauta que se debe tomar en consideración en cualquier decisión, actuación o medida en que se vea involucrado un menor de edad; por tanto, dicho interés se erige como una obligación que asume el Estado a través de todas sus autoridades, para asegurar que en el ámbito de sus respectivas competencias, todas las normas, asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se involucre a la niñez, se garantice y asegure que todos los niños y niñas disfruten y gocen de todos los derechos humanos que les asisten, especialmente aquéllos que resultan indispensables para su óptimo desarrollo.

En concordancia con lo anterior, la Primera Sala del más Alto Tribunal, también ha señalado que del principio de referencia, se desprende la necesidad de considerar al interés superior de la infancia como un criterio rector no sólo en la elaboración de las normas, sino también en la interpretación y aplicación de las mismas, a fin de que en todos los órdenes relativos a la vida del niño o niña, puedan gozar y ejercer plenamente de sus derechos.

En esa virtud, tanto el legislador al momento de elaborar las normas que inciden en los derechos de la infancia, como el juzgador al momento de interpretar o aplicar esas normas, están

obligados a tomar en cuenta este principio a fin de que en todo momento se potencialice la protección integral de los niños y niñas, evitándoles cualquier afectación, lo que se traduce en la obligación de que al ponderar sus intereses frente a los intereses de terceros, cuiden de no restringir aquéllos derechos cuya naturaleza implica el goce esencial de los derechos de la infancia.

En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que decidir una controversia que incide sobre los derechos de dos niñas, deben tener en cuenta que los menores de edad requieren una protección legal reforzada, y que **la única manera de brindarles dicha protección, implica tener en cuenta todos sus derechos y el rol que juegan en la controversia sometida a su consideración, a fin de garantizar el bienestar integral de las niñas, teniendo presente que ese bienestar sólo se alcanza cuando se garantiza a las menores de edad el disfrute pleno y efectivo de todos sus derechos; y como consecuencia, se le protege de manera integral logrando el desarrollo holístico de las mismas.**

En efecto, en mayo de dos mil trece, **la Organización de las Naciones Unidas por medio del Comité de los Derechos del Niño**, emitió la observación general número 14 sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial⁵, esto a fin de explicitar el alcance del párrafo 1 **del artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño**. En dicho documento se establece claramente que el objetivo del interés superior del infante es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos en la Convención, así como el desarrollo holístico del menor de edad,

⁵ Disponible en: http://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC.C.GC.14_sp.pdf (última visita 12 de mayo de 2014 a las 11:02 horas).

desarrollo que de acuerdo a la diversa observación general número 5 del mismo Comité⁶ , abarca el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social del niño.

En consecuencia, el interés superior de la infancia implica garantizar que ninguno de sus derechos se vea perjudicado por una norma o interpretación negativa de la misma, esto es, la plena aplicación del principio relativo al interés superior del menor exige adoptar un enfoque basado en los derechos de la infancia, en el que colaboren todos los intervinientes a fin de garantizar la integridad física, psicológica, moral y espiritual del infante y promover su dignidad humana.

En efecto, **la Corte Interamericana de Derechos Humanos**, ha señalado que el interés superior del menor de edad es un principio regulador de la normativa de los derechos del niño, el cual se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de las niñas y los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades⁷. Y que la prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de la infancia y la adolescencia, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos de la Convención cuando el caso se refiera a menores de edad⁸, de lo cual se puede concluir que no hay duda respecto a que el interés superior de la infancia consiste en un principio insoslayable tanto para el legislador como para el juzgador encargado de

⁶ Disponible en: <http://www1.umn.edu/humanrts/crc/spanish/Sgeneralcomment5.html> (última visita 12 de mayo de 2014 a las 11:25 horas).

⁷ Corte IDH. Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012 Serie C No. 246, Párrafo 126; y Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, Párrafo 109.

⁸ 24 Corte IDH. Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, Párrafo 408.

analizar las problemáticas jurídicas que inciden directa o indirectamente en el grupo de la infancia o bien en un niño o niña determinado.

En esa virtud, si el interés superior de la infancia radica en que cualquier decisión que se tome en torno a ella, debe ser acorde con lo que más convenga a sus intereses, ello implica que para poder cumplir con esa obligación, en primer lugar es necesario tener presente cuáles son los derechos que **la Constitución y los Tratados Internacionales** reconocen a su favor, después es preciso que esos derechos se interpreten y apliquen en forma adecuada, es decir, de la manera que más favorezca las prioridades de los infantes, teniendo siempre en cuenta su condición personal, a efecto de salvaguardar su sano desarrollo en todos los ámbitos posibles, como son el físico, el mental, espiritual, moral, psicológico y social, pues es evidente que por su falta de madurez física y mental, las niñas requieren de cuidados especiales y una protección legal reforzada.

Lo anterior implica que en un juicio en el que se discuten derechos de dos niñas como ocurre en el caso; el juzgador a efecto de salvaguardar el interés superior de la infancia, también está constreñido a atender todas las circunstancias o hechos que en el caso concreto se relacionen con la niñez, ya sea que éstas formen parte de la litis o vayan surgiendo durante el procedimiento, para lo cual también puede recabar, repetir o perfeccionar las pruebas que estime conducentes.

Atendiendo a lo anterior, es evidente que si bien el interés superior de la infancia obliga a todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias a proteger y preservar los derechos de los menores de edad a fin de resolver lo que resulte más favorable a sus intereses, también lo es que debido

a ello, el interés superior de la infancia constituye un concepto jurídico indeterminado, pues en cada caso concreto el juzgador debe analizar los hechos y circunstancias que rodean al niño, a fin de que resuelva lo que más convenga al mismo.

Respecto al tema relativo al del interés superior de la infancia resultan orientadores los criterios que se contienen en las jurisprudencias 1a./J. 25/2012 (9a.), 1a./J. 18/2014 (10a.) y 1a./J. 44/2014 (10a.), cuyo contenido y datos de publicación en el Semanario Judicial de la Federación (electrónico), son los siguientes:

Localizable en la Décima Época Registro: 159897 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1 Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 25/2012 (9a.) Página: 334

“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: “la expresión ‘interés superior del niño’ ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño”.

Localizable en la Décima Época Registro: 2006011 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 18/2014 (10a.) Página: 406

“INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la

norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión.”

*Localizable en la Décima Época Registro: 2006593
Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente:
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, Junio de
2014, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 44/2014 (10a.)
Página: 270*

“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS. Resulta ya un lugar común señalar que la configuración del interés superior del menor, como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así, a juicio de esta Primera Sala, es necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, en qué consiste el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto en los casos correspondientes. Es posible señalar que todo concepto indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas. Una primera zona de certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima. Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamos fuera del concepto indeterminado. En tercer y último lugar la denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones. En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés del menor y obtener un juicio de valor, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta zona podemos observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general para todos los hijos, pues éste varía en función de las circunstancias personales y familiares. Además, dicha zona se amplía cuando pasamos -en la indeterminación del concepto- del plano jurídico al cultural. Por lo anterior, es claro que el derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor para cada supuesto de hecho planteado. Son los tribunales quienes han de determinarlo moviéndose en esa "zona intermedia", haciendo uso de valores o criterios racionales. En este sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, los siguientes: a) se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio

comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4o. constitucional.”

Como lo anterior releva que el interés superior de la infancia implica conocer cuáles son los derechos que la Constitución y los Tratados Internacionales reconocen a favor de la niñez, a fin de que éstos se interpreten y apliquen en forma adecuada, es decir, de la manera que más favorezca las prioridades de los infantes, para responder la interrogante que el caso plantea, se debe tener presente que entre los derechos reconocidos en pro de la infancia, se encuentran los establecidos en la **Convención sobre los Derechos del Niño**, misma que en los numerales 3.2, 8.1, 9.1, 18.1, 18.2, 19.1 y 19.2, establece lo siguiente:

“Artículo 3

[...]

2. *Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas*

[...]”

“Artículo 8

1.- *Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.*

[...]”

“Artículo 9

1.- *Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven*

separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.

[...]

“Artículo 18

1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño.

2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños.

[...]”

Por las consideraciones vertidas se procede a dar respuesta a los agravios expuestos por la disidente, los que resultan **INFUNDADOS E INSUFICIENTES para MODIFICAR o REVOCAR** la sentencia impugnada, ya que contrario a lo que aduce, basta imponerse del contenido del fallo combatido para advertir que el juzgador primario al pronunciarse en los términos en que lo hizo cumplió con los principios de congruencia y exhaustividad previstos por el artículo 87 de la Ley Instrumental Civil, sin que pueda estimarse que la citada resolución carezca de la fundamentación y motivación o bien, que la Juez de la causa, no haya aplicado debidamente la norma al caso que nos ocupa, mucho menos que no haya interpretado el sentido estricto de la misma y como consecuencia, que no haya hecho el debido estudio de la acción relativa a la pérdida de la patria potestad o que, hubiere incurrido en indebida valoración de pruebas, lo anterior, en base a lo que a continuación se razona.

El artículo 598 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, textualmente dispone:

“Artículo 598.- La patria potestad se pierde:

I. Cuando quien la ejerce comete algún delito intencional que afecte al menor o a su patrimonio; o consienta que terceras personas lo cometan;

II. Cuando el que la ejerce es condenado expresamente a su pérdida;

III. Cuando por malas costumbres de quienes la ejerzan o abandono de sus deberes frente a sus descendientes, se comprometa la seguridad o la moralidad de aquellos sobre quienes se ejerce, aunque esos hechos no sean penalmente punibles, o consienta que terceras personas lo realicen;

IV. Cuando quien la ejerce genere violencia intrafamiliar en contra del menor, entendida esta como maltrato físico o psicológico, o bien, cuando consienta que terceras personas ejerzan dicha violencia.

Se entiende por maltrato físico al conjunto de lesiones que presenta una persona, que no resultan de accidentes o golpes fortuitos y que por su periodicidad, atención médica inexistente, huellas de abuso sexual, la naturaleza o causa de las mismas, la existencia de cicatrices antiguas y actuales, aunque no pongan en peligro la vida, evidencian un caso de maltrato.

Se entiende por maltrato psicológico al recurrente empleo de palabras, acciones y actitudes que afecten al menor o al incapaz en su autoestima y autoconfianza, no permitiéndole un sano desarrollo;

V. Cuando quien la ejerce:

a) Exponga a su descendiente;

b) Le abandone por más de tres meses si éste quedó a cargo de alguna institución especializada o persona;

c) Abandone por más de un día a su descendiente, si el menor no hubiere quedado al cuidado de alguna persona y además éste abandono sea intencional; y

d) Cometa actos de violencia intrafamiliar, hacia sus descendientes u adoptados menores de edad.

VI. En los casos de divorcio cuando así se establezca.”

Del numeral antes transcrito y específicamente de la fracción IV, se desprende que la patria potestad se pierde, cuando quien la ejerce genere violencia intrafamiliar en contra del menor de edad, entendida esta como maltrato físico o psicológico; sin embargo de los diversos medios de convicción ofertados por la actora, resultan insuficientes para concluir que el demandado

resulte nocivo para la integridad física, emocional o psicológica de las niñas, incumpliendo con lo preceptuado por el arábigo 286 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, que dispone:

“Artículo 286.- *El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones”.*

Teniendo aplicación al caso los precedentes judiciales siguientes:

Tesis aislada que pronunció la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el tomo XLV, página 4118, registro digital 359698, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación.

“ACCIONES PERSONALES, JUSTIFICACION DE LAS. *Es verdad que acreditada la existencia de un vínculo jurídico, por cualquiera de los medios que la ley establece, incumbe al demandado acreditar que se ha desligado de sus obligaciones, también mediante alguna de las causas extintivas de las mismas, reconocidas por el derecho; y aun cuando la violación de derechos personales es, por lo general, acto negativo, y la falta de pago o de cumplimiento de las obligaciones son de imposible prueba material para el actor, debe tenerse en cuenta que es éste quien debe acreditar todos los extremos de su acción y no sólo algunos de ellos, y aun cuando la excepción relativa al pago debe ser acreditada por el demandado, esta obligación es subsidiaria de la prueba de la acción, cuya carga se impone por la ley, de manera preferente, al demandante, y sólo demostrada su existencia toca a la contraparte, a su vez, demostrar las acciones extintivas de las propias obligaciones.”*

Tesis aislada que pronunció la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el tomo LV, página 2433, registro digital 357087, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación.

“PRUEBA, CARGA DE LA. *El problema que consiste en determinar en un proceso dado, a quien incumbe la carga de la prueba, se plantea cuando no existe prueba de especie alguna, tendiente a demostrar los hechos en que debe fundarse la resolución; es decir, si en un proceso no se ha rendido prueba, o la que se adujo no es suficiente para acreditar los hechos sujetos a debate, como el juzgador no puede excusarse de resolver en el juicio, ni tampoco absolver de la instancia, surge la necesidad de establecer a cuál de las partes debe parar perjuicio por la falta de la prueba; pero este problema propiamente no se plantea cuando existen elementos de prueba en el proceso, bastantes para establecer la existencia o inexistencia de los hechos debatidos, ya*

que no debe perderse de vista que el fin que persiguen las normas procesales, es verificar la verdad de los hechos controvertidos.”

Por tal motivo, para la procedencia de la acción relativa a la pérdida de la patria potestad que ejercita la parte actora en base a la fracción IV del artículo 598 de la Ley Sustantiva Civil del Estado, requiere necesariamente de la comprobación en el sentido que el demandado [No.30]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] ejerció violencia intrafamiliar en contra de las niñas [No.31]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] y [No.32]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], lo que en el presente caso no aconteció, ya que de los medios de convicción ofertados por la parte actora a efecto de justificar su acción, como bien lo estableció el juez de origen, resultaron insuficientes para los fines pretendidos, porque de ningún modo logró acreditar que los actos del demandado fueran nocivos para la integridad física, emocional o psicológica de las niñas, ni tampoco de dichas actuaciones se desprenden que exista una sentencia ejecutoria donde el ahora demandado haya sido declarado culpable por cometer tal delito.

En las mismas condiciones, se encuentra la documental pública consistente en las copias certificadas de la carpeta de investigación 563/2021 de la Agencia del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres, de la Dirección Regional Zona Costa Norte, Fiscalía del Estado de Jalisco, respecto de la cual manifiesta indebida valoración, en razón que contrario a lo aducido por la recurrente, es evidente que dicha probanza fue debidamente valorada atento a lo dispuesto por los artículos 329 y 399 de la Ley Instrumental Civil.

Si bien es cierto, en el juicio de origen la aquí recurrente ofreció tal averiguación, por el supuesto delito cometido en su contra, por violencia familiar y amenazas ejercida por el demandado, también lo es, que de las mismas solo se desprende, que se decretaron medidas de protección a favor de la disidente, más no así de las niñas [No.33]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] y [No.34]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1]., ni tampoco de dichas actuaciones se desprenden que exista una sentencia ejecutoria donde el ahora demandado haya sido declarado culpable por cometer tal delito, la cual merece valor probatorio únicamente a manera de indicio de conformidad con los numerales 329 y 399 del Enjuiciamiento Civil del Estado, y resultan insuficientes para los fines pretendidos. Teniendo aplicación al caso el siguiente criterio:

Localizable bajo Registro digital: 2024071, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, Materias(s): Constitucional, Civil. Tesis: I.3o.C.9 CS (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 9, Enero de 2022, Tomo IV, página 2996, Tipo: Aislada.

“INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA. LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEBEN ESTUDIARSE DE MANERA INDEPENDIENTE A LOS DE LOS PADRES, CUANDO EN UNA CONTROVERSIA ÉSTOS TIENEN INTERESES CONTRARIOS.

Hechos: En un juicio de amparo indirecto, uno de los quejosos por propio derecho y en representación de su menor hija reclamó la sentencia interlocutoria relativa a la guarda y custodia, a través de la cual se confirmó el auto en el que se decretó un arresto por doce horas en su contra, dada la renuencia de presentar a la niña a una entrevista diagnóstica, misma que era necesaria para determinar el régimen de visitas y convivencias a favor de la menor y su progenitora. El Juez de Distrito determinó conceder el amparo bajo el argumento toral de que la medida de apremio consistente en el arresto por doce horas, no cumplía con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución General que consagran los principios fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, porque la responsable debió emitir su mandamiento en términos precisos y bajo las condiciones establecidas por dichos principios, y no en forma genérica, con el objeto de que el quejoso tuviera la certeza jurídica de que la medida se fundó en las disposiciones legales aplicables.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que los derechos de los niños, niñas y adolescentes deben estudiarse de manera independiente a los de los padres, cuando en una controversia éstos tienen intereses contrarios, atento al interés superior de la infancia.

Justificación: Lo anterior, porque con fundamento en los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numerales 1 y 2, 9, numerales 1 a 3 y 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño y 2o., 3o. y 18 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los órganos jurisdiccionales deben atender al principio del interés superior de la infancia. Igualmente, con base en el artículo 1o. de la citada ley, los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos distintos a los de sus padres o tutores. Esto significa que cuando las madres y padres acuden a un juicio por propio derecho y en representación de su hijo o hija, el órgano jurisdiccional está obligado a analizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes de manera separada y diferenciada a la de sus padres quienes, además, en una controversia del orden familiar tienen intereses opuestos. De manera que, con base en el interés superior de la infancia, deben estudiarse por el órgano jurisdiccional los derechos fundamentales y los establecidos en leyes secundarias de las y los niños y adolescentes, de manera independiente a los que tienen sus progenitores. Esto es especialmente importante para poder reparar y fortalecer los lazos de afecto-filiales, de convivencia y respeto entre cada uno de los progenitores con sus hijos, especialmente de quien no detenta la guarda y custodia de éstos.”

De lo que se colige, que de la carpeta de investigación ya referida, **no se desprende ningún elemento que permita suponer la existencia de los hechos de violencia que se imputaron al recurrente, mucho menos que sea un riesgo para las niñas.**

Lo anterior quedó robustecido con las valoraciones psicológicas emitidas por la Psicóloga Licenciada Blanca Elizabeth Hernández Barrón adscrita a la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que obran a fojas 60 a 64 del juicio de origen, de las que se advierte que la niña [No.35]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1]., **“es una menor de [No.36]_ELIMINADA_la_edad_[14] años que muestra hitos de acuerdo a su edad, en cuanto a lo emocional muestra que la situación de sus padres le afecta emocionalmente, se muestra como una menor impulsiva en**

su actuar, pero sensible a los ambientes en los que se desenvuelve”, y por lo que ve a la niña [No.37]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] se desprende; “la menor se muestra con buena disposición, es alegre, contesta cuestionamientos sin dificultad, se muestra con hitos del desarrollo de acuerdo a su edad, no se percibe ninguna dificultad emocional, por lo tanto no existen sugerencias para la progenitora, instrumental de actuaciones que merecen pleno valor probatorio de conformidad con el numeral 402 del Enjuiciamiento Civil del Estado.

Además, de las declaraciones de la niña [No.38]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] de [No.39]_ELIMINADA_la_edad_[14] años de edad, a lo que aquí interesa, manifestó: “A mi papá si lo veo, los sábados y domingos, va por mí a mi casa y de vez en cuando duermo con él y nos devuelve a mi casa. Mi mamá nos deja ir con mi papá, pero yo me siento más segura con mi mamá que con mi papá. **A mi si me gusta ir con mi papá, pero me sentí insegura un día porque nos llevó al malecón y estaba lloviendo y mi papá si ya sabía que iba a llover para que estacionaba el carro tan lejos. De mi papá no me gusta que toma mucha cerveza, no se emborracha, pero toma cerveza, yo nunca lo he visto borracho, mi papá me trata bien. Mi papá a veces no va por nosotras, mi papá trabaja en** [No.40]_ELIMINADAS_las_referencias_laborales_[54] Si yo pudiera elegir me gustaría vivir con mi mamá porque me siento más segura **y visitar a mi papá, también verlo en vacaciones, mi papá me quiere llevar de vacaciones a México y a mi si me gustaría”.**

Por lo que ve a la escucha por la menor de edad [No.41]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] de edad a lo

que aquí interesa, refirió: *“Mi papá vive solo, tiene amigos, mi papá trabaja en un puesto de tacos, están ricos y me compro una tina que se llena cuando está lloviendo y nos bañamos. A mi papá si lo veo seguido, pero trabaja en los tacos y cuando trabaja no lo veo, a mi si me gusta ver a mi papá. Cuando voy con mi papá duermo con él, mi papá me trata bien solo me gustaría que me diera un juguete, pero no me gusta dormir con él porque se va la luz, yo prefiero dormir todos los días con mi mamá, pero me gusta ver a mi papá. Cuando voy con mi papá juego con él.”*

De dichas escuchas, se colige que existe una vinculación afectiva entre las hijas y sus progenitores que conviven en el hogar de éste y que la aptitud con que las trata les brinda bienestar y les procura un entorno adecuado con su edad.

Aunado a lo anterior, tampoco acreditó la falta de suministro de alimentos del demandado para con sus hijas; por el contrario, se advierte de las actuaciones de origen, que con fecha 04 cuatro de febrero del 2022 dos mil veintidós (véase foja 89), las partes aquí contendientes celebraron un convenio por lo que ve al rubro de alimentos, mismo que se elevó a la categoría de sentencia ejecutoriada, mediante auto de fecha 01 primero de abril de la presente anualidad, sin que a la fecha se haya justificado el supuesto incumplimiento por parte del progenitor varón, por tanto se comparte lo resuelto por el Juzgador de origen en la sentencia apelada, al considerar que la parte actora no logró justificar que el demandado haya ejercido violencia intrafamiliar en contra de las niñas o bien que se ponga en riesgo la seguridad o la moralidad de éstas, ello considerando que la sociedad está interesada en la conservación de las relaciones paterno filiales, así como, el que padres e hijas mantengan los vínculos legales

que generan derechos y obligaciones, por no obrar ninguna prueba directa que permita establecer dicha circunstancia.

En vista de lo anterior, deviene incuestionable que en la especie, no obstante que la actora haya ofertado diversos medios de convicción, los mismos resultan insuficiente para evidenciar que el padre representara un riesgo para las niñas [No.42]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] y [No.43]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1]., y poder declarar procedente la acción de pérdida de la patria potestad pues la procedencia de la citada acción, se insiste, acarrea consecuencias graves tanto para el progenitor como para las hijas, ya que se necesitan pruebas plenas e irrefutables para decretar su pérdida, tal y como lo señala la Jurisprudencia que se transcribe a continuación: Cobra aplicación el siguiente criterio, que textualmente dice:

Localizable bajo: Registro digital: 186753 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Materias(s): Civil. Tesis: I.9o.C.87 C. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Junio de 2002, página 674. Tipo: Aislada

“PATRIA POTESTAD. NO SE PIERDE POR LA EXISTENCIA DE VIOLENCIA FAMILIAR ENTRE CÓNYUGES.

Conforme al artículo 444 del Código Civil para el Distrito Federal, la existencia de violencia familiar de uno de los cónyuges hacia el otro no da por consecuencia jurídica la pérdida de la patria potestad, porque en ninguna de las causales previstas por ese precepto se prevé, ya que la patria potestad es una institución de orden público, en cuya preservación y debida aplicación de las normas que la regulan, la sociedad está especialmente interesada y la pérdida de tal derecho entraña graves consecuencias tanto para los hijos como para quien los ejerce y, en el caso de la fracción III del mismo precepto, porque la violencia familiar, como causal de la pérdida del aludido derecho en las relaciones familiares, se prevé para el caso de que la violencia familiar se ejerza directamente en contra del menor y que, además, sea en grado suficiente para determinar la supresión del citado derecho, porque tal

instituto ha de conservarse o retirarse en función de las relaciones específicas que medien entre el padre o la madre y sus hijos, y no en función de los conflictos que hayan surgido entre los cónyuges, ya que esto último no hace imposible que el progenitor desempeñe adecuada y suficientemente la potestad sobre su descendiente.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL
DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 7209/2001. Rebeca Granados Gutiérrez. 25 de enero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Daniel Horacio Escudero Contreras. Secretario: Román Fierros Zárate”.

Para concluir, los agravios en comento son en parte, repetición de lo esgrimido por la apelante en su libelo inicial, por lo que no impactan el sentido de la resolución combatida, y no combaten en forma alguna los cuestionamientos que fueron materia de estudio en la sentencia definitiva aquí recurrida, sino que reiteran los motivos de inconformidad formulados en su demanda, sin combatir, como ya se dijo, las consideraciones de la sentencia recurrida; lo anterior con apoyo en la jurisprudencia y tesis visibles bajo las voces y textos siguientes:

Novena Época, Registro: 166748, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, Agosto de 2009, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 109/2009 , Página: 77.

“AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA.- Conforme al artículo 88 de la Ley de Amparo, el recurrente debe expresar los agravios que le causa la sentencia impugnada, lo que se traduce en que tenga la carga, en los casos en que no deba suplirse la queja deficiente en términos del artículo 76 Bis de la ley de la materia, de controvertir los razonamientos jurídicos sustentados por el órgano jurisdiccional que conoció del amparo en primera instancia. Consecuentemente, son inoperantes los agravios que en el recurso de revisión reiteran los conceptos de violación formulados en la demanda, abundan sobre ellos o los complementan, sin combatir las consideraciones de la sentencia recurrida.

Amparo directo en revisión 1978/2008. Aceros Nacionales de México, S.A. de C.V. 28 de enero de 2009. Cinco votos. Ponente:

José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Ileana Moreno Ramírez.

Amparo directo en revisión 321/2009. 29 de abril de 2009. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Óscar Rodríguez Álvarez.

Amparo directo en revisión 913/2009. Arturo Julio Arce Taracena. 10 de junio de 2009. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza.

Amparo directo en revisión 879/2009. Transport Martín, S.A. de C.V. 17 de junio de 2009. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías.

Amparo directo en revisión 884/2009. José Urbina Cruz. 24 de junio de 2009. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores.

Tesis de jurisprudencia 109/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del ocho de julio de dos mil nueve.”

V.- CONCLUSIONES. - En vista de lo anterior, las suscritas Magistradas integrantes de este cuerpo colegiado arribamos a la firme convicción que lo legal es **CONFIRMAR** la sentencia definitiva impugnada, ante lo infundado e insuficiente de los agravios vertidos por la parte apelante, resultando que debe prevalecer la atención a la situación de las menores de edad, es decir, debe darse prioridad a los derechos de las hijas de los aquí contendientes, y sujetarnos a lo que resulta más benéfico para ellos y no para los intereses de los padres, protegerlas especialmente en sus derechos de vivir en familia atendiendo al interés superior de la niñez.

VI.- COSTA EN SEGUNDA INSTANCIA. - Finalmente, al no actualizarse alguna de las hipótesis previstas en el artículo 142 de la Ley Instrumental Civil, no se realiza especial condena en costas por lo que a esta segunda instancia se refiere.

VII.- FORMATO DE LECTURA FÁCIL.-

[NO.44] ELIMINADO EL NOMBRE COMPLETO [1] Y

[NO.45] ELIMINADO EL NOMBRE COMPLETO [1]., como sus papás ya no vivirán juntos, y al haber sido invitadas al juzgado para platicar con ustedes, después de haberlas escuchado y decir que, si les gusta ver a su papá, que juegan con él y que las trata bien, se decidió que van a vivir con su mamá, pero también van a poder ver a su papá los días que elijan y puedan por sus actividades, también que su mamá y papá las van a seguir cuidando y haciéndose cargo de ustedes.

Nos despedimos de ustedes con gusto, mandándoles muchos saludos.

Bajo ese contexto y con fundamento en lo que establecen los artículos 435, 437, 438, 439 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, este recurso se resuelve con las siguientes:

PROPOSICIONES:

PRIMERA. Los agravios esgrimidos por [No.46] ELIMINADO el nombre completo [1] en su carácter de la parte actora, resultaron **INFUNDADOS E INSUFICIENTES**, para variar el sentido del fallo, en consecuencia;

SEGUNDA. - Se **CONFIRMA** la sentencia definitiva de fecha **27 veintisiete de junio del año 2022 dos mil veintidós**, pronunciada por el Juez Cuarto de lo Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, en el juicio

CIVIL ORDINARIO, promovido por
[No.47]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] en contra de
[No.48]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] registrado
bajo expediente **259/2021**.

TERCERA.- Al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el artículo 142 de la Ley Instrumental Civil, no se realiza condena en costas por lo que a esta Segunda Instancia se refiere.

CUARTA.- Devuélvanse las actuaciones y documentación fundatorio al juzgado de procedencia, con testimonio de la presente resolución y en su oportunidad archívese la toca como asunto concluido.

En razón de que la presente resolución se pronunció dentro del plazo de 30 treinta días que dispone el artículo 439 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, conforme lo disponen los arábigos 109, fracción VI y 129 del cuerpo de leyes invocado, notifíquese por medio del Boletín Judicial.

NOTIFIQUESE.

Así lo resolvieron las integrantes de la Novena Sala del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco, por unanimidad de votos de las Magistradas **ANA CRISTINA ESPINOSA VALADEZ (ponente), VERÓNICA ELIZABETH UCARANZA SÁNCHEZ y LUCÍA PADILLA HERNÁNDEZ**

actuando ante el Secretario de Acuerdos Licenciado **RAÚL GONZÁLEZ MARTÍNEZ**, quien autoriza y da fe.

PMC

MGDA. PRESIDENTA ANA CRISTINA ESPINOSA VALADEZ

MGDA. VERÓNICA ELIZABETH UCARANZA SÁNCHEZ

MGDA. LUCÍA PADILLA HERNÁNDEZ

SECRETARIO DE ACUERDOS RAÚL GONZÁLEZ MARTÍNEZ

FUNDAMENTACION LEGAL

***LGPPICR. Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.**

No.1 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*.

No.2 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*.

No.3 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*.

No.4 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*.

No.5 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*.

No.6 ELIMINADO_el_número_16 en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*.

No.7 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*.

No.8 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*.

No.9 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*.

No.10 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*.

No.11 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*.

No.12 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*.

No.13 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*.

No.14 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*.

No.15 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*.

No.16 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*.

No.17 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*.

No.18 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*.

No.19 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*.

No.20 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*.

No.21 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*.

No.22 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*.

No.23 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*.

No.24 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*.

No.25 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*.

No.26 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*.

No.27 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*.

**No.28 ELIMINADAS_las_referencias_personales en 1 renglon(es) por
ser un dato laboral de conformidad con el lineamiento
quincuagésimo octavo fracción V de los LGPPICR*.**

**No.29 ELIMINADAS_las_referencias_personales en 1 renglon(es) por
ser un dato laboral de conformidad con el lineamiento
quincuagésimo octavo fracción V de los LGPPICR*.**

**No.30 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por ser un
dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo
octavo fracción I de los LGPPICR*.**

**No.31 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por ser un
dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo
octavo fracción I de los LGPPICR*.**

**No.32 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por ser un
dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo
octavo fracción I de los LGPPICR*.**

**No.33 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por ser un
dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo
octavo fracción I de los LGPPICR*.**

**No.34 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por ser un
dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo
octavo fracción I de los LGPPICR*.**

No.35 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*.

No.36 ELIMINADA_la_edad en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*.

No.37 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*.

No.38 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*.

No.39 ELIMINADA_la_edad en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*.

No.40 ELIMINADAS_las_referencias_laborales en 1 renglon(es) por ser un dato laboral de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción V de los LGPPICR*.

No.41 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*.

No.42 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*.

No.43 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*.

No.44 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*.

No.45 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*.

No.46 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*.

No.47 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*.

No.48 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*.